

Extravío de la academia

● Lo ocurrido recientemente en la Universidad Austral con la ministra de Ciencia y Tecnología nos obliga a reflexionar sobre algo más profundo que un fallo en los protocolos de seguridad; nos enfrenta a la erosión de nuestra convivencia básica y, lo que es más grave, al extravío ético de quienes dirigen y conforman la vida universitaria.

Resulta esclarecedor volver la mirada a 1887, cuando Manuel Antonio Carreño, en su célebre Manual de Urbanidad y Buenas Costumbres, definía la visita como un acto que “contribuye a fomentar, consolidar y amenizar las relaciones amistosas”, siendo indispensable para el “cultivo de la amistad, la consideración y el agradecimiento”. Para Carreño, la visita era el vehículo de la buena educación y su omisión, una falta grave a los deberes sociales.

Hoy, cuando una autoridad del Estado es recibida con agresiones en una casa de estudios, observamos con estupor cómo los alumnos parecen haber perdido el norte. La universidad, que por definición debe ser el templo de la razón y la hospitalidad, ha permitido que la ideología aniquile el rito de la visita como instancia de diálogo.

Si los centros de saber ya no son capaces de garantizar la mínima urbanidad que exige el recibir a un visitante, es porque sus actores han renun-

ciado a su misión fundamental. Cuando la autoridad académica y el cuerpo docente no logran imponer el respeto que la civilización exige, el fondo se vuelve inaccesible.

Juan de Dios Videla Caro

Ley de Adopción e infancias

● La decisión del gobierno de retirar de la Contraloría el decreto vinculado a la implementación de la nueva Ley de Adopción no es una señal menor y resulta preocupante. Ya que se vuelve a postergar una discusión que Chile arrastra hace más de una década y retrasa la entrada en vigencia de un mecanismo que buscaba agilizar procesos judiciales, acortar tiempos de espera y entregar respuestas más oportunas a niños y adolescentes.

Se trata de una decisión que impacta directamente en trayectorias de vida marcadas por la vulneración de derechos, la fragilidad de los vínculos y la demora sistemática en las respuestas del Estado.

La Convención sobre los Derechos del Niño es clara, y mandata a los Estados a asegurar que el interés superior del niño debe ser una consideración esencial en todas las medidas que les afecten. Bajo ese principio, ninguna decisión institucional es neutra. Menos aún cuando lo que está en juego es el derecho de niños, niñas y ado-